





CAPÍTULO 04

FRONTERAS INVISIBLES Y
VIOLENCIA EN LAS PERIFERIAS

En el marco de la situación de la población joven integrante de pandillas explicada en los capítulos anteriores, un intendente de la Policía Metropolitana señalaba como una de las causas de la violencia persistente en los barrios periféricos de Cali: “Los pelados de las Minas no pueden entrar hacia la cancha donde se ubica la banda delincuencia. De ahí para allá no pueden subir; es una frontera”²⁶. Esta situación no es el resultado de una coyuntura ni de una crisis en un pequeño sector de la ciudad, pues son muchos los jóvenes de las periferias pobres del oriente y la ladera occidental de Cali los que habitan territorios cercados por líneas imaginarias. En estos territorios, el control territorial por parte de pandillas o bandas criminales es tan fuerte que termina impidiendo que los habitantes de un barrio se puedan desplazar libremente de un lado a otro sin sentir temor por su seguridad.

Es un hecho que, en América Latina, los pobladores urbanos menos privilegiados son los que sufren con mayor rigor la violencia (Auyero, 1999; Auyero et al., 2014; Auyero y Berti, 2013; Perlman, 2005), y los habitantes de los sectores menos privilegiados de Cali no son la excepción (Franco Calderón, 2020; Hernández y Franco Calderón, 2021). En esta ciudad, la tasa de homicidios en 2019 se estimó en 47,3 por 100.000 habitantes; una cifra que por poco duplica la tasa promedio reportada para Suramérica en el último informe de la *United Nations Office on Drugs and Crime*, establecida en 24,2 por 100.000 habitantes (UNODC, 2019, p. 16)²⁷. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2020), solo en la última década han sido asesinadas 15.518 personas en Cali, la mayor parte en el área conocida como el Distrito de Aguablanca en el Oriente y en los asentamientos informales de la ladera occidental. Análisis de los móviles de los homicidios llevados a cabo por el Observatorio de Seguridad de Cali (2019) han mostrado que muchos de estos homicidios han tenido relación con pandillas y organizaciones criminales que operan en territorios controlados mediante la instauración de líneas imaginarias denominadas *fronteras invisibles*.

Si bien la noción de fronteras invisibles aparece en la literatura que estudia la relación entre violencia urbana y control territorial en las ciudades

²⁶ Intendente Jefe de la Policía Metropolitana de Cali, comunicación personal, 29 de agosto de 2017.

²⁷ Dato de 2017.

colombianas²⁸ (Castillo, 2015; Doyle, 2018; Lamb, 2010; Samper, 2017) también es común encontrar el uso de términos similares que aluden al mismo fenómeno. Conceptos como *fronteras imaginarias* (Penilla et al., 2015) o *líneas invisibles* (López-López et al., 2014; Maclean, 2014; Winton 2015), también son usados para referirse a las líneas imaginarias que no existen físicamente, pero que se arraigan en el imaginario colectivo como fronteras establecidas por ciertos grupos para ejercer control territorial.

La población desfavorecida de Cali, sin embargo, no solo padece la existencia de fronteras invisibles establecidas a nivel local, que conducen al recrudecimiento de la *violencia directa*. También convive con la existencia de fronteras invisibles a nivel urbano, consolidadas como resultado de una *violencia estructural*, presente de manera velada en los arreglos económicos y de poder que gobiernan la ciudad. Estas fronteras, resultantes de una violencia indirecta y normalizada por la sociedad en general, contribuyen de manera tácita a perpetuar fenómenos como la segregación socioespacial y étnico-racial, la estigmatización, la pobreza y la marginalidad de segmentos sociales específicos.

Como lo explica Galtung (1969, p. 171) mientras la *violencia directa o personal* se caracteriza por la existencia de una relación manifiesta entre el sujeto y el objeto, y es personal porque se hace visible a través de una acción directa cometida por un agente, la *violencia estructural* se da de forma indirecta y oculta. Esta forma de violencia, arraigada en las estructuras económicas y sociales, se expresa en las relaciones desiguales de poder que llevan a una distribución desigual de los recursos y del acceso a oportunidades. Bajo este enfoque, la violencia estructural puede ser entendida como *injusticia social* (Galtung, 1969, p. 171). A pesar del daño profundo que causa este tipo de violencia en una sociedad, la atención del accionar público se centra en actuar sobre la violencia personal la cual, como se indicó anteriormente, es visible y directa. Como lo afirma Galtung (1969), “el objeto de la violencia personal la percibe y puede quejarse [mientras que] el objeto de la violencia estructural puede ser persuadido incluso de no percibirla” (p. 173)²⁹.

En este contexto, se parte aquí de la premisa de que en Cali las *fronteras invisibles* no son únicamente líneas imaginarias de escala local creadas por

²⁸ Autores como Lamb (2010, p. 144) incluso aluden a la existencia de una “política estricta de control de fronteras” establecida por grupos al margen de la ley, que afecta directamente la población vulnerable de los barrios de Medellín la cual no puede moverse libremente de un barrio a otro por las continuas confrontaciones derivadas del control territorial.

²⁹ Traducción propia del texto original en inglés.

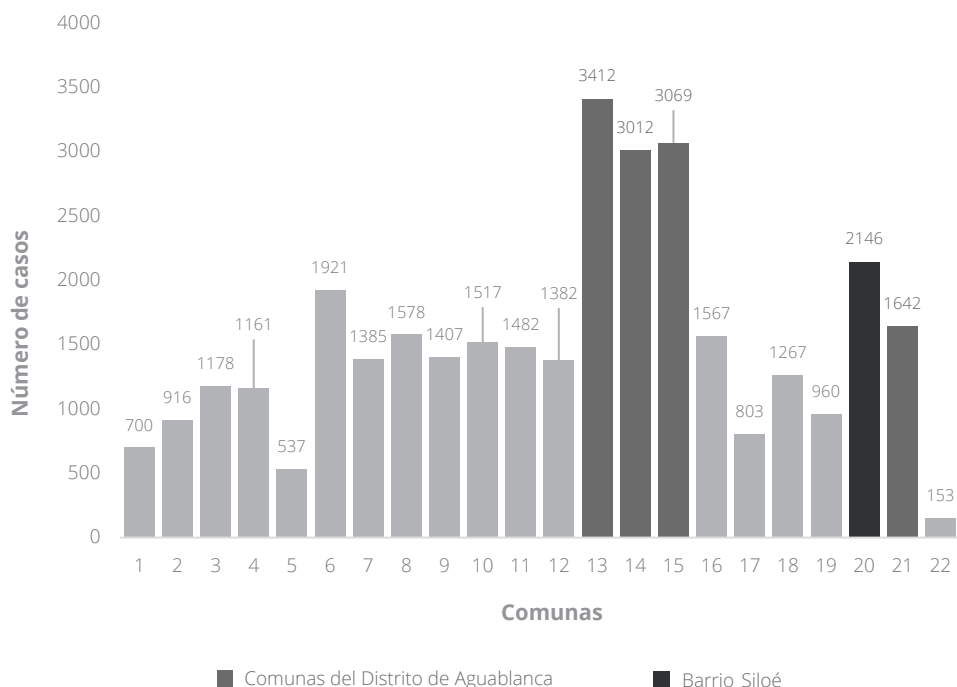
grupos al margen de la ley para ejercer control territorial mediante acciones de violencia directa, sino también líneas imaginarias de escala urbana creadas mediante mecanismos legítimos, en un marco de violencia estructural, con los cuales las clases dominantes han logrado mantener una separación espacial entre clases favorecidas y desfavorecidas, bajo parámetros sociales, económicos, étnicos y raciales.

Para el análisis de los dos tipos de fronteras invisibles descritos anteriormente se toman como referencia, en la escala local y en relación directa con las periferias, los resultados de la encuesta de caracterización de los jóvenes vulnerables que hicieron parte del Programa TIP-JSF. Esta información se complementó con datos cualitativos obtenidos mediante la realización de observaciones en campo y ocho grupos focales realizados entre 2019 y 2020. En la escala urbana, el análisis se fundamenta en datos de estratificación socioeconómica, resultados de la encuesta Sisbén con corte a 2018, bases de datos de homicidios del Observatorio de Seguridad entre 1993 y 2018, cartografía a nivel urbano sobre auto-reconocimiento étnico y asentamientos humanos precarios, así como análisis espaciales de zonas específicas de la ciudad.

De acuerdo con los planteamientos anteriores, este capítulo hace referencia a las fronteras invisibles en el contexto de la violencia directa, profundizando en la situación de los jóvenes de pandillas que hicieron parte del Programa TIP-JSF. Así mismo se enfoca en revelar las formas que toma la violencia estructural en Cali, usada como mecanismo para mantener patrones de segregación, acceso desigual a recursos, bienes y servicios urbanos, así como el control en la toma de decisiones sobre el desarrollo económico, social y territorial. Finalmente, se incluye un análisis del significado de la noción de *fronteras invisibles* en Cali y el papel que tienen estas líneas imaginarias en la perpetuación de fenómenos como la violencia, la segregación y la marginalidad urbana.

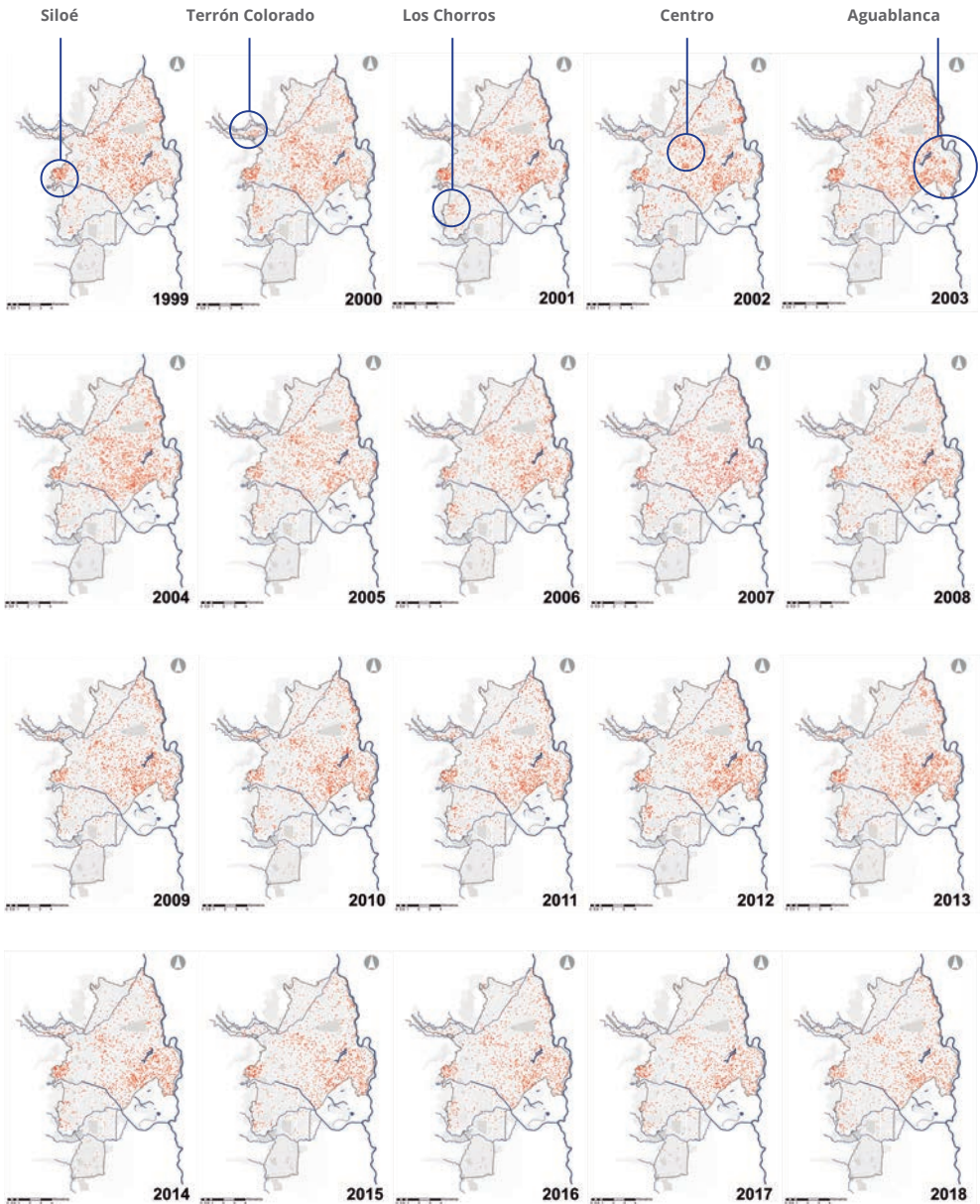
CONTROL TERRITORIAL, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

Además de altos índices de pobreza, bajos niveles educativos y altas tasas de desempleo, subempleo e informalidad, la violencia urbana es otro de los problemas centrales que afecta, de manera cotidiana, a los jóvenes vulnerables de Cali. Como se muestra en el Gráfico 4.1, en las últimas dos décadas (1999-2018) se han registrado 33.195 homicidios en la ciudad, concentrados en sectores específicos de la ciudad.

Gráfico 4.1 Número de homicidios en Cali entre 1999 y 2018.

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali, 2019.

Como lo muestra la geografía del homicidio en Cali (Figura 4.1), a lo largo de los últimos veinte años la concentración de los homicidios ha persistido en la periferia oriental (Distrito de Aguablanca conformado por las comunas 13, 14, 15 y 21), en la ladera occidental (barrios Terrón Colorado en la Comuna 1, Los Chorros en la Comuna 18 y Siloé en la Comuna 20) y en una fracción del centro que entró en deterioro hace ya varias décadas y en la cual el gobierno local ha iniciado un proceso de renovación urbana. Estas áreas, a su vez, ostentan los mayores índices de pobreza y desempleo como se mostrará en detalle más adelante.

Figura 4.1 Geografía del homicidio en Cali 1999-2018.

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali, 2019.

Al desagregar los homicidios registrados en el último año en seis tipos de móviles³⁰, se puede observar que casi la mitad de los 1170 casos registrados en el año 2018 tienen relación con el crimen organizado, seguido en porcentajes iguales del 19% por problemas de convivencia y delincuencia común. Así mismo, llama la atención que los homicidios que tuvieron como móvil pandillas solo fueron el 7% de los casos, mostrando una disminución sustancial de este tipo de homicidios desde la implementación del Programa TIP-JSF (Figura 4.2).

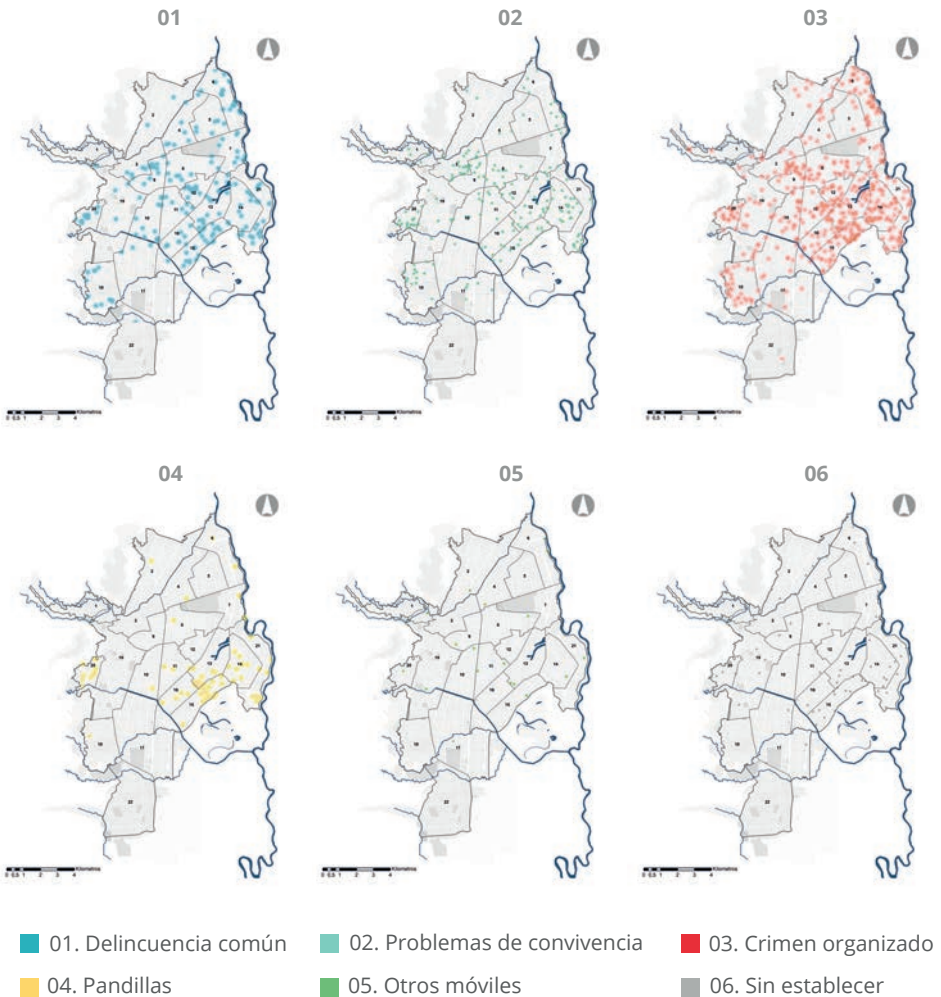
Si bien la forma como se estandariza la captura de datos sobre violencia homicida en Cali permite establecer móviles y localización de los casos, no se puede simplificar la explicación de la violencia en la ciudad al poder y accionar de las bandas criminales, relacionadas con el mayor porcentaje de muertes violentas. Sin que sea posible con los datos disponibles realizar un análisis detallado de corte cualitativo para construir correlaciones más refinadas, sí cabe anotar que las nociones de *violencia desde arriba* (Wacquant, 2008) y *violencias concatenadas* (Auyero et al., 2014) podrían contribuir en explicar, en parte, la persistencia de la violencia en ciertos sectores de Cali. Por un lado, Wacquant (2008, pp. 24-25) sugiere que en sociedades caracterizadas por una profunda polarización en la estructura de clases, segregación racial y reducción en los beneficios del estado de bienestar se ejerce una *violencia desde arriba*. De acuerdo con este autor, este tipo de violencia tiene tres componentes centrales: el desempleo masivo, la relegación de la población desfavorecida en los barrios con las peores condiciones de calidad de vida y la estigmatización no solo por clase y raza sino por lugar de residencia (Wacquant, 2008). En este sentido la violencia persistente en los sectores marginales de Cali puede explicarse como el resultado y expresión visible de la espiral descendente que se desencadena por la intersección entre pobreza, desempleo de largo plazo, segregación socio-espacial y étnico-racial, en un entorno en el que los delitos menores y la participación en actividades del crimen organizado se convierten en una opción importante para la generación de ingresos.

Por otro lado, Auyero et al. (2014) plantean que la violencia directa, que afecta las comunidades más desfavorecidas, es usada no solo en contextos criminales sino en situaciones cotidianas que involucran al núcleo familiar. Este hallazgo indica que analizar las formas de violencia como entidades fragmentadas puede no conducir al hallazgo de las verdaderas causas de este fenómeno. Como lo sugieren estos autores, “probar empíricamente los usos y correlaciones de las diferentes formas de violencia lleva a considerar la violencia como un repertorio que es empleado para afrontar injusticias individuales o

³⁰ De acuerdo con la metodología explicada en Fandiño, Guerrero, Mena y Gutiérrez (2017, p. 164).

colectivas” (Auyero et al., 2014, p. 452). Bajo esta perspectiva, se hace necesario abordar este fenómeno no solo a partir de la expresión más extrema de la violencia que es el homicidio, sino también a partir de la comprensión del contexto y las características de los grupos sociales que la padecen. En este sentido, la breve reseña de la situación de los jóvenes vulnerables de Cali que hacen parte de pandillas y que viven la violencia de manera directa, arrojan algunas pistas claves para comprender su realidad, su entorno y las situaciones complejas que estos jóvenes deben enfrentar en su día a día.

Figura 4.2 Geografía del homicidio por móviles, 2018.



Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali, 2019.

LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES VULNERABLES

La realidad difícil que enfrentan las personas jóvenes en Cali queda demostrada con el hecho de que, durante las dos últimas décadas, el 54% de las víctimas de homicidio en la ciudad (18.756 personas) tenían entre los 14 y 28 años. Datos del Observatorio de Seguridad de Cali correspondientes al año 2018 muestran que la tendencia se mantiene, pues el 54% de los homicidios de ese año (630 casos) fueron jóvenes. El hecho de que el porcentaje de jóvenes víctimas de homicidio se haya mantenido estable, muestra el fracaso de las políticas públicas para lograr la reducción de los casos en este grupo.

Usando el indicador de los años potenciales de vida perdidos por muertes violentas, Dorado (2020) refuerza la idea de que existen ciertos grupos que representan una mayor vulnerabilidad como es el caso de los hombres jóvenes de barrios vulnerables. Al cuantificar el costo económico potencial causado por los homicidios de las personas en capacidad de producción entre 2008 y 2018, se encontró que la carga económica de los años de vida perdidos para la ciudad oscila entre \$232 mil y \$402 mil millones, concentrada esa pérdida en las comunas de Oriente y Ladera. Esta cifra muestra lo que representa solo a nivel de ingresos del núcleo familiar, la pérdida de un ser querido en edad productiva.

La revisión de los móviles de los homicidios por grupos de edad muestra que el mayor porcentaje de homicidios en la población joven se encuentran asociados al crimen organizado, específicamente a homicidios por venganzas o ajustes de cuentas por relaciones directas o indirectas con organizaciones criminales (Tabla 4.1).

Tabla 4.1 Número de homicidios por rango de edad (2018).

Rango de edad	Delincuencia común	Problemas de convivencia	Crimen organizado	Pandillas	Otros móviles	Sin establecer	Total general
0-4	1	4	0	0	0	0	5
5-9	0	0	0	0	0	0	0
10-13	1	1	2	0	0	2	6
14-17	11	17	36	14	3	8	89
18-24	66	64	180	39	11	17	377
25-28	39	32	67	14	1	11	164
29-34	46	30	89	8	4	11	188
35-39	31	27	61	4	2	7	132
40-44	9	13	25	0	1	7	55
45-49	11	11	31	0	0	4	57
50-54	1	10	21	0	0	3	35
55-59	2	6	9	0	0	1	18
60- más	13	12	13	0	1	5	44
Total general	221	546	225	79	2	76	1.170

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali, 2019.

Con base en conversaciones informales con la Policía Metropolitana de Cali se pudo determinar que además de ser las principales víctimas, los jóvenes también participan como victimarios, no sólo como perpetradores de los homicidios en enfrentamientos entre pandillas o por riñas callejeras, sino también como terceros contratados por las *oficinas de cobro*³¹ para ejecutar homicidios selectivos, microtráfico, cobro de deudas y extorsiones. Una serie de testimonios publicados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dan cuenta de esta relación estrecha entre crimen organizado y jóvenes integrantes de pandillas:

“Las oficinas se dedican a reclutar a los pelados de las pandillas para que cometan asesinatos y realicen otras tareas. En el Distrito de Aguablanca, la Comuna 18 y la Comuna 1 reclutan pelados de 16 años para atrás, porque saben que por ley si los cogen tienen que soltarlos de una [...] Las bandas subcontratan a las pandillas; pero no solo eso, también les prestan un entrenamiento a sus miembros y los adaptan a las necesidades específicas de las bandas; les enseñan roles especializados como el robo de celulares, el fleteo, el sicariato, la microextorsión, etc. Las bandas y las pandillas crean ‘cadenas productivas’ del delito y la violencia” (2014, p. 95).

Estas tareas los llevan, necesariamente, a fluctuar entre ser víctimas o victimarios pues en los contextos en los que viven, las faltas de los jóvenes contratados por el crimen organizado se pagan con la muerte.

Esta alta correlación entre violencia homicida y víctimas jóvenes en Cali también se ha encontrado en otras ciudades del mundo, principalmente en el triángulo norte de Centroamérica (López, 2019), conformado por países con grandes brechas sociales y económicas que se expresan en el territorio a través de altos niveles de segregación socio-espacial. Además de la violencia persistente, las áreas marginales que surgen como producto de esta segregación también se caracterizan por tener una población joven con pocas posibilidades de generación de ingresos en el mercado laboral formal, y los jóvenes se emplean mayoritariamente en la informalidad y en algunos casos en la ilegalidad. Esto, debido a factores como bajo nivel educativo, baja oferta de empleo, raza, poco acceso a la información sobre oportunidades laborales debido a un bajo capital social o por la estigmatización de que son víctimas por su lugar de residencia.

³¹ Definidas por Castillo (2015, p. 46) como “una modalidad de outsourcing de servicios ilegales que funcionan como un intermediario o centro de coordinación entre las organizaciones que pagan –organizaciones criminales y personas del común– y sicarios para ejecutar encargos por fuera de la ley”.

A la existencia de estas barreras que impiden su acceso al mercado laboral formal, se suma una oferta permanente de posibilidades de generación de ingresos ligadas a actividades ilegales, muchas de ellas vinculadas con el crimen organizado. Como lo explican Portes y Roberts (2005, p. 49) cuando las oportunidades laborales son limitadas y la pobreza afecta de manera previsible a las familias vulnerables, es común que se recurra al “emprendimiento forzado” como alternativa, el cual puede incluir actividades al margen de la ley. A esto se suma que la opción de la ilegalidad, denominada por Wacquant (2008, p. 67) como “un sistema de bienestar subalterno” afecta en mayor medida a los *hombres jóvenes*, quienes están más dispuestos a asumir mayores riesgos cuando las oportunidades les son negadas o cuando las que existen no los satisfacen en términos económicos o de realización personal.

Las actividades ilegales generadas y heredadas del narcotráfico de la década de los ochenta y comienzos de los noventa en Cali, sumadas al aumento gradual del consumo local, han terminado supliendo las necesidades de ingresos de los jóvenes más vulnerables en Cali (Observatorio de Drogas en Colombia, 2016; Rocha, 2011; Salazar y Frasser, 2013). Como lo expresa una de las jóvenes que asistió a los grupos focales, si bien ha desempeñado labores diversas en el mercado laboral informal, cuando no ha tenido trabajo el expendio de drogas a pequeña escala también ha sido una alternativa:

Trabajé en un restaurante, en un taller de sandalias –siempre recomendada–, cortadora de tela y pues también así con los amigos vendiendo vicio y cosas así. (Grupo Focal Comuna 1, 13 de abril de 2019).

Ante el desempleo o la presencia de empleos precarios han sido las redes del narcotráfico y las oficinas de cobro, las que han estado reclutando jóvenes para llevar a cabo tareas relacionadas con el microtráfico, extorsión, hurtos calificados, cobros de préstamos *gota a gota*, entre otros. Como lo afirman Castillo et al. (2019, p. 21), “las organizaciones juveniles (parches, combos, pandillas, grupos de amigos) prestaron la fuerza de trabajo requerida para transportar, almacenar, vender y vigilar la droga que sería vendida en las esquinas de los barrios y colegios vecinos”. Y también se convirtieron en víctimas de ese negocio en el que no solo los usan como mano de obra, sino que también los pueden eliminar si no cumplen las expectativas de quienes lo manejan.

En el ejercicio de construcción de redes con los jóvenes del Programa TIP-JSF realizado para determinar la naturaleza de sus contactos sociales, la cárcel o la muerte aparecen como algo cotidiano. La mayoría de los jóvenes encuestados, nodos principales de las redes construidas, tienen un amigo

cercano, un primo o un hermano que ha fallecido de manera violenta o que está tras las rejas, como se explicará en el capítulo 5. En los barrios desfavorecidos de Cali muchas madres ven morir a sus hijos e incluso, en algunos relatos, dicen que no pueden hacer nada para impedir una muerte que, para ellas, es inevitable por el sector en el que viven y por convivir con personas que corren con suertes similares. Casi un 70% de los jóvenes del Programa TIP-JSF ha experimentado la muerte violenta de un familiar, amigo o miembro del parche, lo que crea en muchos de ellos la idea de venganza o de sentir que morir joven es su destino, algo que es más visible en los jóvenes de género masculino (Tabla 4.2). Como se mencionó anteriormente, algunos de ellos incluso expresan que es importante, antes de que los maten, tener un hijo y conocer la “pinta”.

Tabla 4.2 Familiares, amigos y miembros del parche que han muerto de manera violenta.

Respuesta	Número de casos	Porcentaje
Si	1.636	69,3%
No	691	29,3%
No aplica	34	1,4%
Total	2.361	100%

Fuente: TIP-JSF, 2019.

Por otro lado, las mujeres jóvenes hablan de la muerte de su pareja cuando apenas estaban embarazadas o con sus niños aún muy pequeños, o de las visitas que les hacen en la cárcel los domingos, como un tema que muchas comparten. Estas circunstancias, entre otras, las convierte en madres solteras que las empuja a buscar recursos para garantizar el sustento de sus hijos. Esto dice una joven soltera que vive en Aguablanca sobre su situación personal:

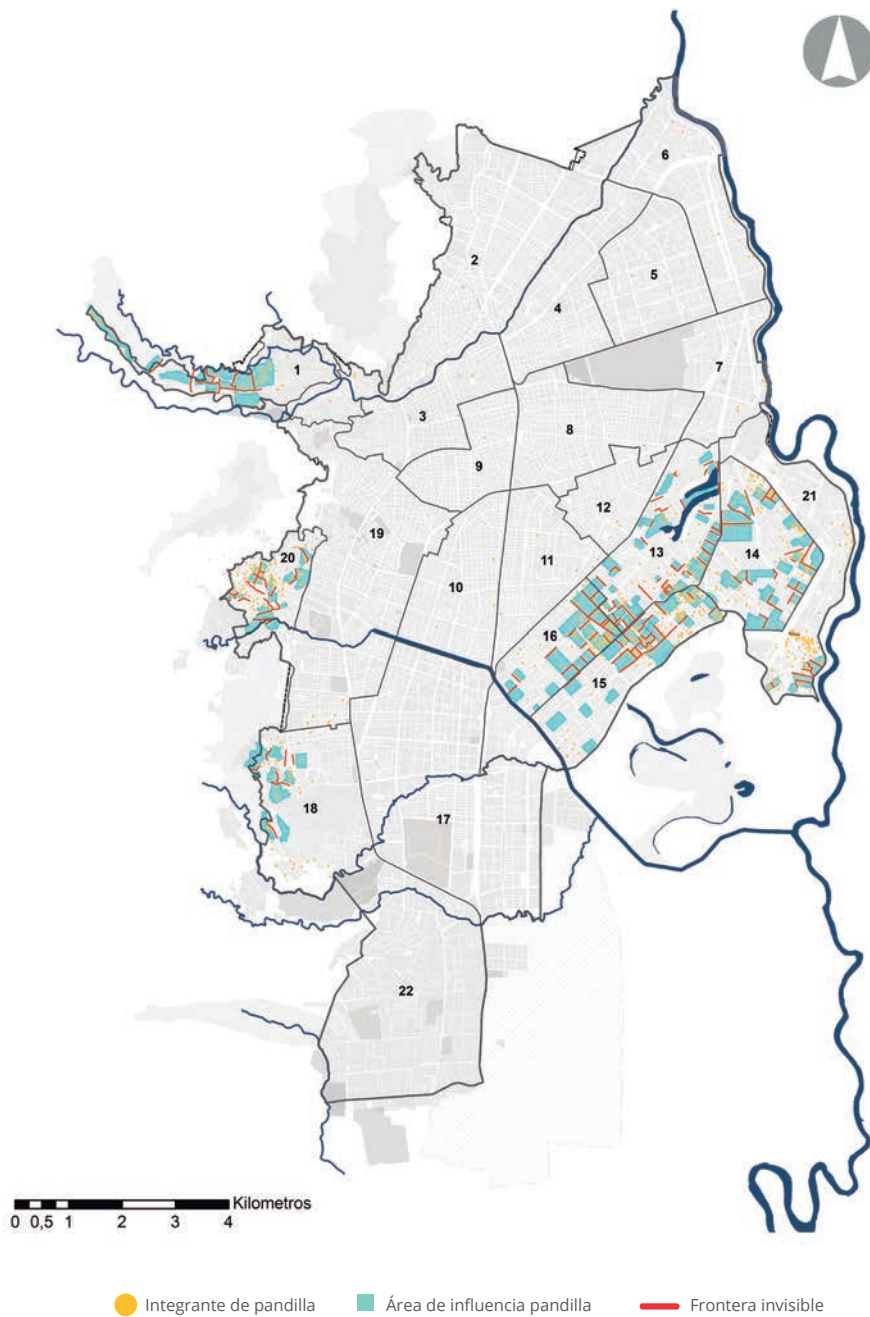
A veces sí, por la situación del trabajo, las obligaciones, las necesidades los pone a robar. A mí me ha colocado a vender, pa' que le digo, yo he vendido mucha marihuana. ¡Obvio! Me ha tocado por mi hijo que ya cumplió ocho años. (Grupo Focal Comuna 14, 5 de septiembre de 2019).

En esa situación, los niños son los más afectados, pues desde muy pequeños, se ven enfrentados a los riesgos de quedarse en la casa solos, y también de identificar la *calle* rápidamente como el espacio donde aprenden a conseguir recursos y a defenderse de otros. En esa carrera por sobrevivir, se juntan con otros niños y jóvenes que están en sus mismas condiciones, creando comunidades y grupos que refuerzan y exacerbando sus carencias. Esta es una vía muy rápida para ingresar a una pandilla o tener relaciones con una banda (Castillo et al., 2019) que, en algunos casos, se convierten en sus redes de apoyo que le proveen recursos, seguridad y confort pero que también los expone a violencias y privaciones.

A la pregunta de a qué edad ingresó a la pandilla, muchos jóvenes dicen haber ingresado a los diez años, porque veían que los más grandes también ya estaban en pandillas, y era una forma de protección en el territorio en el que viven y de lograr cosas que por sí solos no lograrían. Aunque este comportamiento es muy propio de los jóvenes en esas edades, el problema radica en que *la pandilla* es concebida como *una red para protegerse de otros que son sus enemigos* y para proteger el territorio (el “pedazo” como ellos lo llaman), para tener una marca que los diferencie de los demás. Entonces en los barrios vulnerables existen grupos de jóvenes que heredan las rencillas del pasado de su pandilla, pero no conocen las razones de esas peleas, y tampoco les preocupa. Solo entienden que, ante un hecho de violencia del enemigo, la retaliación es la respuesta y eso se puede prolongar en el tiempo sin medir las consecuencias.

No es difícil encontrar barrios en Cali, en el que los jóvenes de una cuadra forman una pandilla para enfrentarse con la pandilla de la cuadra del frente. Los espacios “del otro” son territorios vedados por donde no se puede pasar. De esta manera y, durante años, se han ido consolidando *fronteras invisibles* en las periferias de Cali, que surgen como líneas imaginarias que dividen los territorios en los que se ejerce control sobre las rentas ilegales derivadas del microtráfico, los préstamos y la extorsión (Mapa 4.1). Los resultados de la investigación en el marco del Programa TIP-JSF revelan la cantidad de fronteras invisibles que son reconocidas en las zonas controladas por pandillas, conformando micro-territorios que en algunos casos no superan una cuadra a la redonda. Estas líneas se convierten en espacios de agresiones y muerte a quien intente violarlas, o a quien lo haga por error o por necesidad de movilización natural.

Mapa 4.1 Localización de integrantes de pandillas, área de influencia de los grupos y fronteras invisibles.



Fuente: datos TIP-JSF, 2019 y Sisbén, 2018.

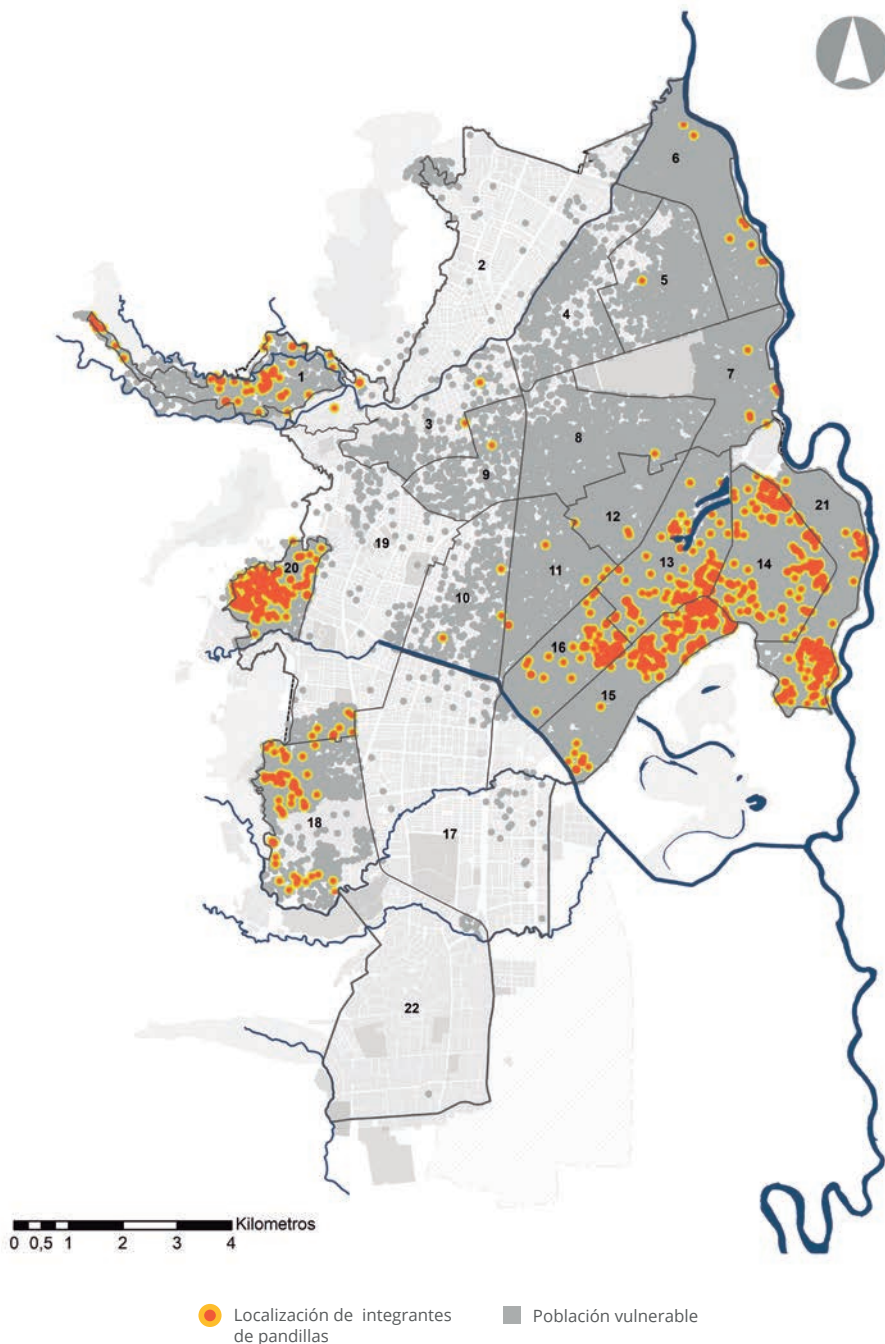
En este contexto, la presencia de fronteras invisibles en los barrios periféricos genera una movilidad reducida de los jóvenes, que se limita a unas cuantas cuadras en el barrio. Allí, no solo se enfrentan a sufrir las consecuencias de una planificación urbana que los priva de zonas verdes y espacios para el esparcimiento, la cultura y el deporte, sino que ahora sus dinámicas de pandilla y control territorial, los reduce a tomar decisiones cotidianas en las que terminan eligiendo el camino más largo si quieren salir del territorio protegido o si quieren ir a estudiar o a trabajar.

Son muchas las historias de jóvenes que han pagado con su vida el olvido de esas advertencias o que han intentado desafiarlas. Bajo estas circunstancias complejas, uno de los logros más importantes del Programa TIP-JSF, en las diferentes comunas en las que actuaba, fue la eliminación de muchas de esas fronteras a través de actividades lúdicas conjuntas entre diferentes pandillas. En esos espacios los jóvenes identificaban al otro como un par y no como un enemigo, y podían darse cuenta de que gran parte de los motivos de sus enfrentamientos y retaliaciones con otros parecidos a ellos, eran banales. Los partidos de fútbol, por ejemplo, se convirtieron en encuentros de paz y de reconciliación entre jóvenes de diferentes pandillas.

FRONTERAS URBANAS, SEGREGACIÓN, RACISMO Y ESTIGMATIZACIÓN

Como se mencionó en la sección anterior, una característica de la vida cotidiana de los jóvenes es la mediación de sus relaciones por la violencia. En la casa, en la escuela, en el barrio, esta población está expuesta a múltiples expresiones de violencia directa y estructural que determinan sus decisiones y conductas. Para esta población de hombres y mujeres jóvenes, muchos de ellos afrodescendientes, sus condiciones actuales ya fueron determinadas desde el momento cuando nacieron, pues heredaron las condiciones de pobreza, segregación racial y marginalidad en que han vivido sus progenitores. En este contexto, las interacciones que se dan en ese entorno marcado por la precariedad, la estigmatización y el racismo, terminan siendo mediadas por la violencia directa y la conformación de grupos de jóvenes creados para acompañarse, defenderse de otros y para defender el territorio (Mapa 4.2).

Mapa 4.2 Concentración de pandillas y concentración de la pobreza.



Fuente: datos TIP-JSF, 2019 y Sisbén, 2018.

A pesar de la inversión estatal en las zonas de Oriente y Ladera, un porcentaje alto de la población que habita allí sigue enfrentando situaciones adversas que impiden su desarrollo, las cuales los condena a la precariedad en un círculo vicioso que se reproduce entre generaciones. Aunque algunos perciben que hoy están mejor con respecto a sus condiciones de vida de hace 20 años, si se les compara con poblaciones de otros sectores de la ciudad frente a su participación en el mercado laboral y en el sistema educativo formal, la brecha se ha ido ampliando. Una educación deficiente tanto en primaria como en secundaria minan las posibilidades de entrar a la universidad, aumentando la diferencia con quienes pueden, desde niños, ir a escuelas y colegios de buena calidad y con quienes deben competir después en el mercado laboral. Los jóvenes pobres en Cali enfrentan un conjunto de oportunidades educativas desiguales que continúa durante toda su educación. Como dice Auyero (1998), citando a otros autores, se podría argumentar que sus experiencias educativas no buscan y no pueden prepararlos para funcionar en la misma sociedad y en la misma economía.

El sistema de salud no les brinda un servicio preventivo y de seguimiento a su crecimiento y desarrollo desde el momento en que nacen y sus familias, con bajos ingresos, no alcanzan a suplir lo que no pueden conseguir del Estado, a lo que se suma que están rodeados de otras familias con las mismas o peores carencias. Sin embargo, las dinámicas que mantienen marginadas a estas familias, lejos de ser normales, parecen ser aceptadas como parte de un destino del que no se puede escapar. Como lo afirma Schep-Hughes (2004, p. 14), la violencia estructural es justamente ese mecanismo que “borra la historia y conciencia de los orígenes de la pobreza, la enfermedad, el hambre y la muerte prematura hasta que son simplemente dados por sentado y naturalizados”.

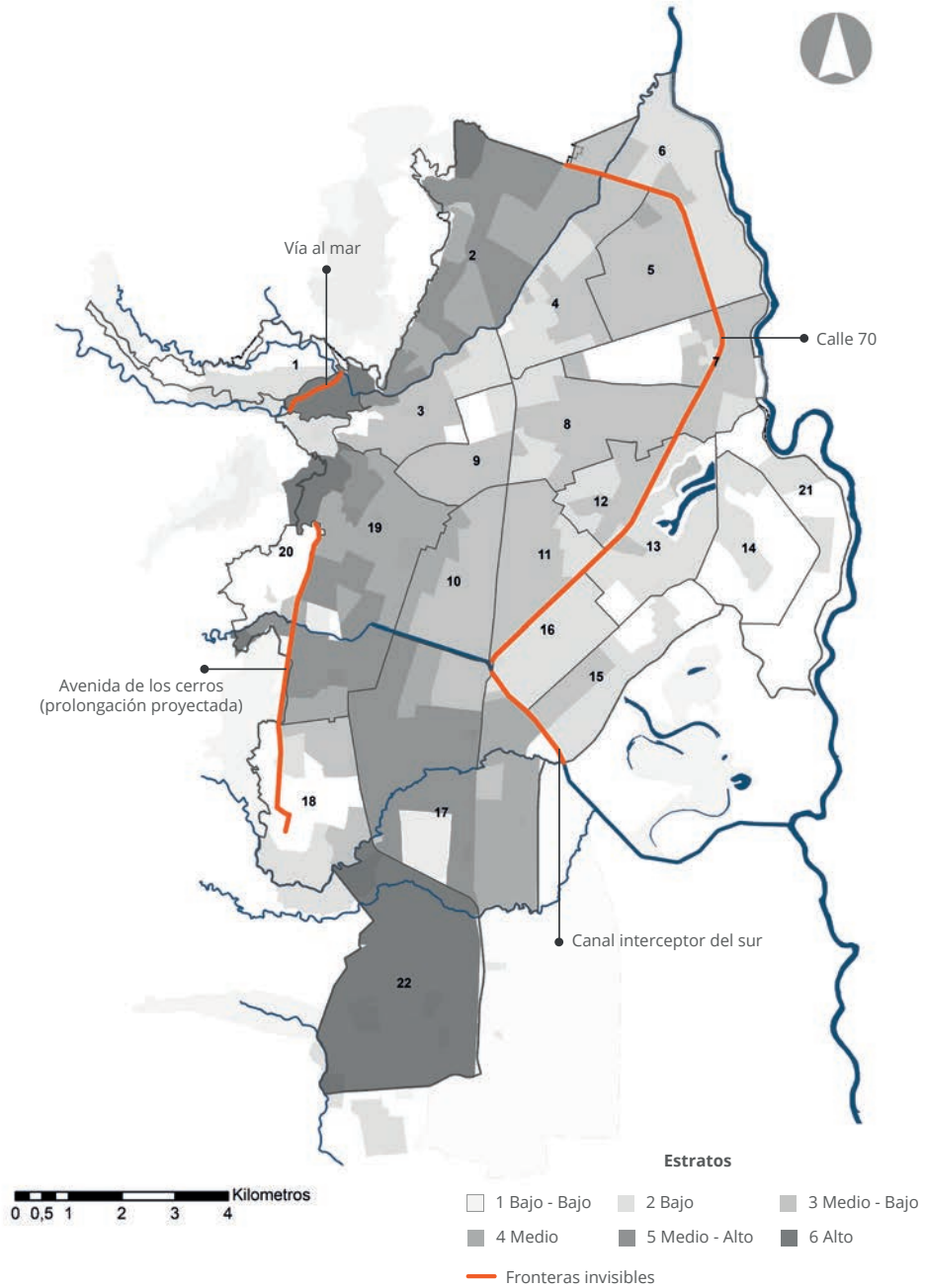
Pero cuando escalamos el análisis y pasamos de lo local al contexto urbano, lo que queda en evidencia es que el desarrollo de Cali se ha caracterizado históricamente por una marcada segregación socioespacial y étnico-racial, en gran parte permitidas por la existencia de una matriz de dominación que aún persiste³². Durante décadas, los tomadores de decisiones han utilizado mecanismos legítimos como la planeación urbana, para mantener la separación espacial entre estratos socio-económicos bajos y altos mediante el establecimiento de líneas imaginarias que se han ido corriendo del centro a la periferia desde la era colonial y que se consolidaron durante el último

³² Hernández (2017, p. ix) incluso asegura que la segregación socio-espacial y racial no son un fenómeno del siglo XX pues esta condición ha sido “ubicua desde la fundación de las ciudades latinoamericanas en el siglo XVI”.

cuarto del siglo pasado como *fronteras invisibles* a nivel de ciudad. Lo que vemos hoy en Cali es una división territorial en la cual tres vías primarias y un canal colector ejercen el papel de líneas divisorias entre la ciudad privilegiada y la ciudad de los pobres: la Vía al Mar, parte de la Avenida de los Cerros y su prolongación en el costado occidental de la ciudad y la Calle 70 y el Canal Interceptor del Sur en los costados oriental y suroriental respectivamente. Estas fronteras (líneas rojas en el Mapa 4.3), que marcan una diferenciación social y racial, ratifican la separación que instrumentos como la estratificación socioeconómica pusieron aún más en evidencia.

De acuerdo con el historiador Édgar Vásquez (2001, p. 4), después de los años cincuenta en Cali, se redefinió y consolidó la distribución socio-espacial de la ciudad hasta configurar “dos ciudades”: el espacio de los “excluidos”, como anillo que rodea a Cali a lo largo de los cerros y las márgenes del río Cauca, y la ciudad de los “incluidos” que ocupa el interior.

Una mirada más cercana a los barrios favorecidos y desfavorecidos pone en evidencia la inequidad en el tipo de urbanismo que se ha ido consolidando en cada una de las áreas de la ciudad. Cuatro casos -el asentamiento informal Siloé en la ladera occidental, el barrio San Antonio en el centro histórico, el Distrito de Aguablanca en el Oriente y el barrio Ciudad Jardín en el sur de la ciudad- muestran las enormes diferencias en la calidad del espacio urbano en los barrios de estratos bajos, medios y altos. Esta calidad está representada en accesibilidad (ancho y regularidad de las vías), cobertura arbórea y zonas verdes (estrechamente relacionada con las condiciones de confort climático) y proximidad a áreas con usos mixtos (comerciales y de servicios urbanos básicos) entre otros factores.

Mapa 4.3 Estratificación socioeconómica y fronteras invisibles a escala urbana.

Nota: los polígonos blancos representan los grandes equipamientos urbanos.

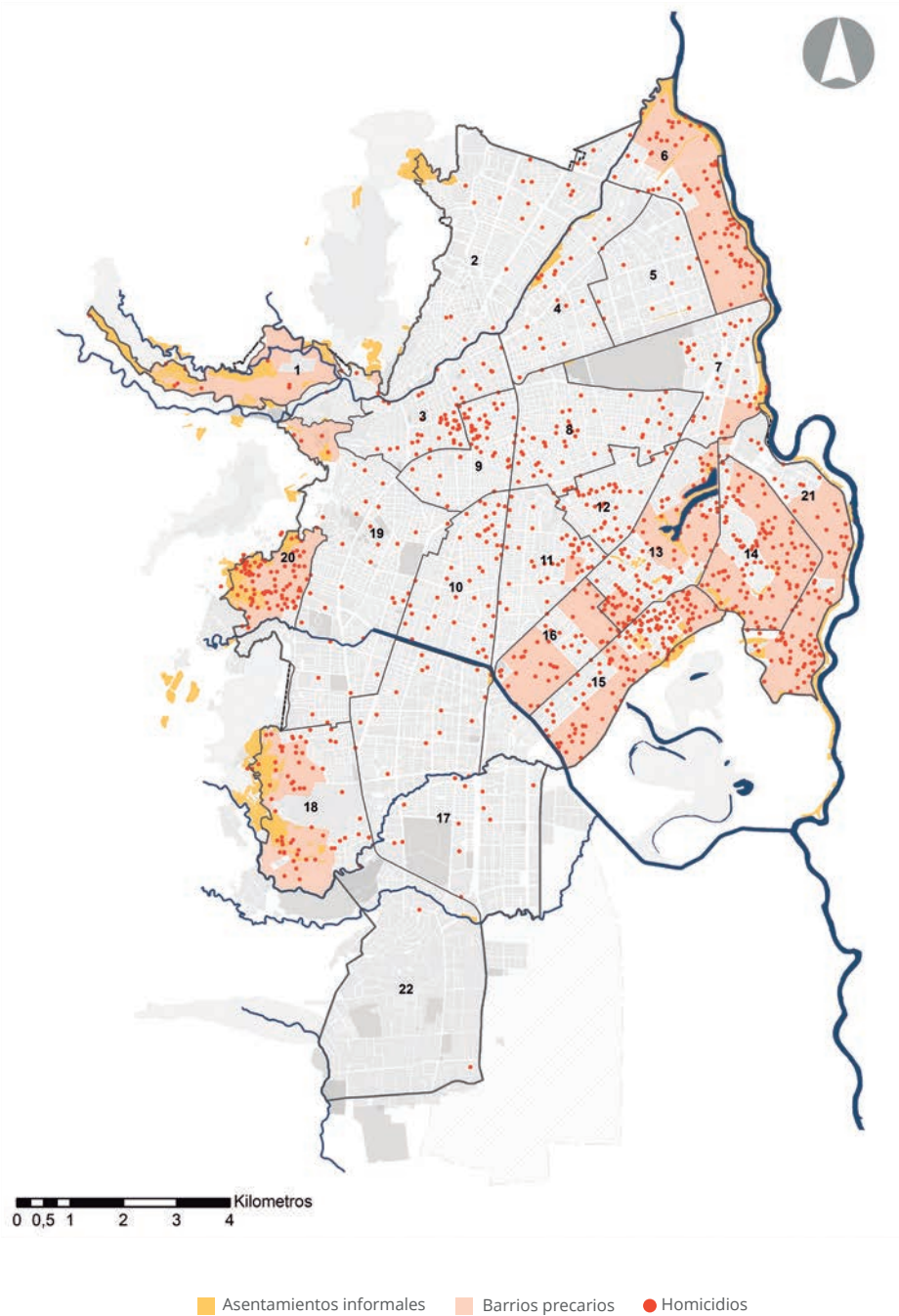
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2020.

Figura 4.1 Tejido urbano y calles tipo en cuatro sectores de Cali.

Fuente: Fotografías TIP-JSF, 2019 e imágenes satelitales Google-earth, 2019.

Aunque establecer una correlación entre la baja calidad espacial de los barrios y la violencia directa requeriría análisis específicos que sobrepasan el alcance de esta investigación, sí es posible afirmar que la ubicación de los sectores reconocidos oficialmente por el gobierno municipal como los más precarios³³, coincide en gran medida con las zonas segregadas por las fronteras antes señaladas que, a su vez tienen la mayor concentración de población afrodescendiente y las mayores tasas de homicidio (Mapa 4.4).

³³ La Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat (Acuerdo 0411 de 2017), agrupa en la categoría “asentamientos humanos precarios” todos los barrios precarios (de origen formal) y asentamientos informales que presentan mala calidad de la vivienda y el entorno.

Mapa 4.4 Asentamientos precarios y homicidios ocurridos en 2018.

Fuentes: Política Pública MiHábitat, 2017;
Censo Nacional DANE, 2005 y Observatorio de Seguridad de Cali, 2019.

El hecho de que algunos barrios de las periferias occidental y oriental tengan mayores tasas de homicidio y una imagen negativa para el común de los caleños tiene una implicación directa en la limitación de oportunidades para los jóvenes que frecuentemente son estigmatizados tanto por su lugar de residencia, como discriminados por su condición racial. Como lo sugieren autores como Auyero (1999), Perlman (2006) y Wacquant (2007; 2008), los habitantes de barrios, que han sido etiquetados en el imaginario colectivo como “peligrosos”, “marginales” o “violentos”, tienen menos oportunidades de acceso al mercado laboral formal³⁴.

Para algunos de los jóvenes del Programa TIP-JSF, vivir en la ladera o en el Distrito de Aguablanca se ha convertido en una barrera por el estigma que pesa sobre estas zonas:

A mí me decían: lleve hojas de vida y no ponga que vive en Terrón Colorado, porque si no, no lo van a llamar y ¡dicho y hecho! Yo no colocaba y sí tenía la posibilidad, pero [hubo] amigos que colocaban donde vivían y nunca recibieron una llamada (Grupo Focal Comuna 1. Cali, abril 13 de 2019).

A las condiciones de vivienda y entorno precarios, los altos niveles de violencia y la estigmatización que enfrentan los residentes de los barrios periféricos de Cali donde habitan los jóvenes que hacen parte del Programa TIP-JSF, se deben sumar la inequidad en el acceso a espacios públicos y servicios urbanos, un factor que acentúa la brecha entre los jóvenes vulnerables y segmentos más privilegiados de la población. La poca oferta y baja calidad de espacios públicos implica un entorno que no promueve el encuentro y la convivencia a través de actividades colectivas. El acceso limitado y la calidad deficiente de servicios urbanos básicos como salud, educación, deporte y cultura refuerzan la violencia estructural que se evidencia en el acceso desigual a los recursos. Un ejemplo de la deficiencia de los servicios básicos en las comunas donde opera TIP-JSF es el bajo desempeño de los estudiantes de los colegios públicos y privados de estas zonas en las pruebas Saber 11 y la barrera que esto genera para el acceso a educación técnica y superior.

Cuando superponemos en un solo mapa de la ciudad, los asentamientos identificados como precarios, la oferta de espacios públicos y equipamientos colectivos y las fronteras invisibles que hacen alusión a la violencia directa,

³⁴ En el caso de Brasil, por ejemplo, Janice Perlman (2006, p. 170) pudo determinar que el estigma que existe sobre la población de las favelas no logra ser contrarrestado con mejores niveles educativos en el momento de buscar empleo.

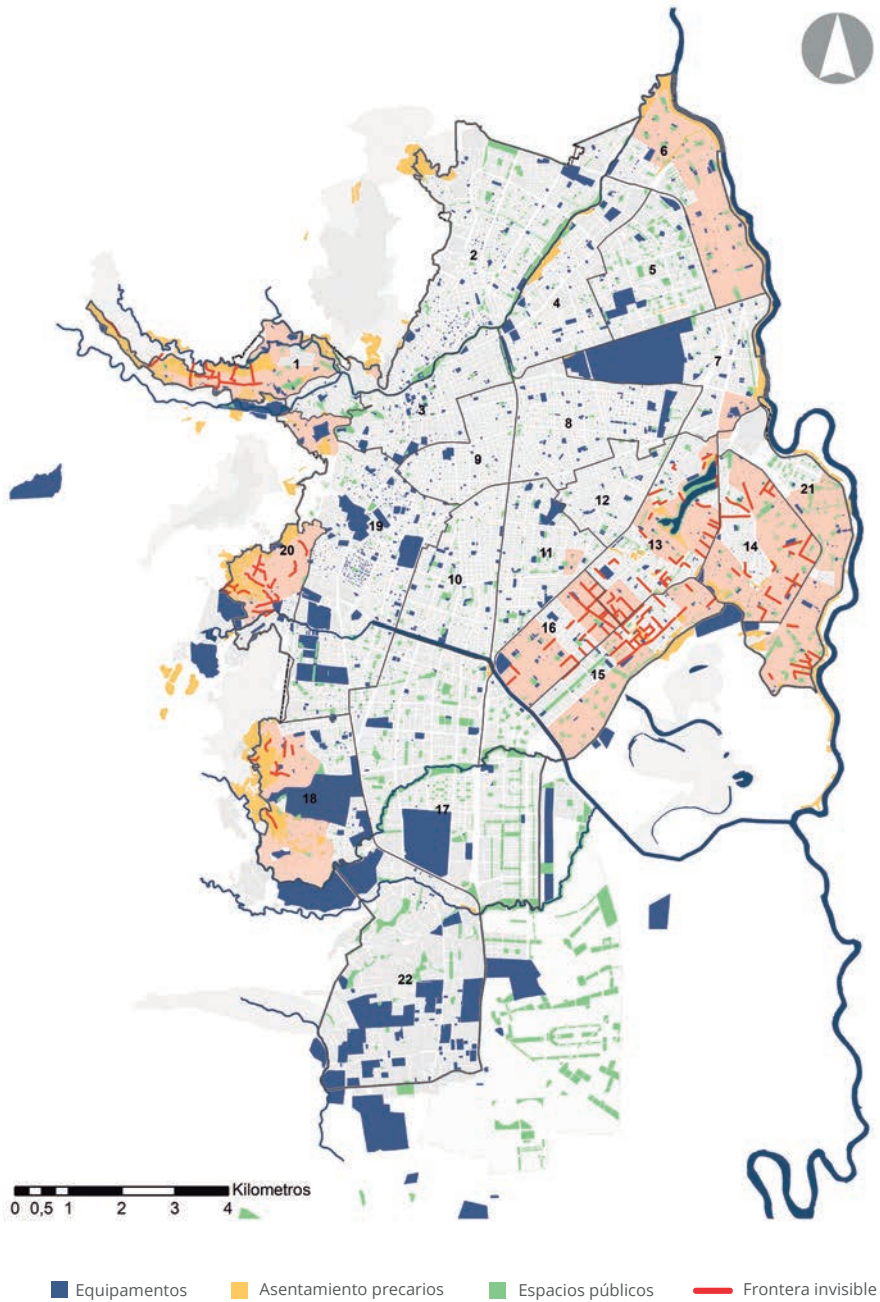
las zonas de Oriente y Ladera se destacan por concentrar la población con menor calidad urbana, que además no puede acceder a oferta en otras áreas por la restricción a su libre circulación generada por las fronteras invisibles que han emergido en los barrios (Mapa 4.5). El reconocimiento y naturalización de estas fronteras invisibles podrían reforzar la idea de que los espacios públicos no son necesarios en lugares donde los jóvenes no pueden salir de sus cuadras, o donde las pandillas o las organizaciones criminales se apoderan de ellas y las controlan. Aunque suene perverso y descabellado, tanto las organizaciones y grupos ilegales como el Estado han confinado a los jóvenes a sobrevivir en espacios reducidos, localizados en áreas de la ciudad que carecen de la calidad necesaria para ofrecerles un mejor futuro y que están separadas de la ciudad privilegiada por un tipo de fronteras invisibles que se deriva de la persistencia de la violencia estructural.

Figura 4.2 Vista aérea de barrios formales e informales en la Comuna 18 y en el corregimiento de La Buitrera en Cali.



Fuente: Miguel Galeano, Monoceja, 2021.

Mapa 4.5 Equipamientos, espacios públicos, asentamientos precarios y fronteras invisibles.



Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, 2014 y TIP-JSF, 2019.

Finalmente, a todo lo anterior es necesario sumar la distancia geográfica que existe entre los barrios pobres de la periferia y los centros de empleo que se complica aún más por la mala calidad del transporte público en estas zonas. Como lo muestran estudios realizados por la Universidad del Valle, una persona que vive en la parte alta de la Comuna 1, o en uno de los extremos de la Comuna 21, puede demorarse hasta 90 minutos en llegar a las zonas donde se concentra el empleo en el eje norte-sur y los habitantes del Distrito de Aguablanca pueden tardar entre 60 y 80 minutos (Rodríguez et al., 2018), mientras para las áreas más privilegiadas estos tiempos pueden ser incluso menores a 30 minutos. Este problema se agudizó con la implementación de un sistema de transporte masivo en Cali en el 2009, que prometió resolver los conflictos de movilidad en la ciudad. Sin embargo, son más las dificultades que ha traído, incentivando el incremento de transporte privado (motocicletas y carros particulares) y el transporte informal en bicicletas con motor, motos y carros, sin garantías de seguridad vial, ni para los conductores ni para los pasajeros. De nuevo, los más afectados son los sectores más pobres de la ciudad que deben resolver diariamente sus problemas de movilidad y recurrir a decisiones de transporte más riesgosas para sus vidas.

Todos estos elementos hacen parte de lo que hemos señalado aquí como una violencia estructural que agrupa dimensiones económicas, políticas y socioculturales, arraigada históricamente y que ha llevado a una democracia en la cual las decisiones de una minoría poderosa y con recursos se impone sobre una mayoría en desventaja. Como lo plantean Aguilar-Forero y Muñoz (2015):

Este tipo de violencia, afecta de múltiples maneras a los sujetos en condición juvenil, quienes han sido confinados de manera acelerada y creciente a condiciones de vida precarizadas signadas por la falta de oportunidades, el desempleo, el subempleo, el empobrecimiento, la marginalidad social y las múltiples situaciones de violencia que en países como Colombia suelen estar acompañadas por niveles abrumadores de indiferencia e impunidad (p. 1023).

Los jóvenes de Cali que viven en los sectores más pobres deben enfrentar diariamente la toma de decisiones en un contexto hostil y cargado de carencias y privaciones que agudizan su vulnerabilidad. Como se ha mostrado en este capítulo esta situación es recurrente y parece ser heredada de generación en generación. La violencia estructural de que son víctimas los pone en trayectorias más riesgosas frente a sus pares de estratos medios y altos que han tenido oportunidades y formas de vida diferentes.